

## SESIONES ORDINARIAS

2004

## ORDEN DEL DIA N° 1678

## COMISION DE POBLACION Y RECURSOS HUMANOS

Impreso el día 17 de noviembre de 2004

Término del artículo 113: 26 de noviembre de 2004

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación respecto de la adjudicación, uso y explotación de tierras establecida en la ley sobre políticas indígenas –ley 23.302– y cuestiones conexas. **Daher.** (6.113-D.-2004.)

## Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Población y Recursos Humanos ha considerado el proyecto de resolución de la señora diputada Daher por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre la situación respecto de la adjudicación, uso y explotación de tierras. Ley de políticas indígenas –23.302–; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.

*María E. Barbagelata. – Cristian A. Ritondo. – María L. Monteagudo. – Liliana A. Bayonzo. – Margarita R. Stolbizer. – Ana E. R. Richter. – Guillermo M. Cantini. – Jorge O. Di Landro. – María N. Doga. – Gustavo E. Ferri. – Irma A. Foresi. – Margarita O. Jarque.*

## Proyecto de resolución

*La Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que por medio de los organismos que correspondan informe, con relación al cumplimiento del decreto 155/89, reglamentario de la ley 23.302 - Protección de comunidades aborígenes, por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como autoridad de aplicación, los siguientes aspectos:

1. Situación de las comunidades indígenas con relación a la adjudicación, uso y explotación de tierras, análisis efectuado por el INAI sobre este aspecto y conclusiones a las que arribó.

2. Resoluciones adoptadas sobre adjudicación de tierras cuya propiedad hubiese sido transferida por el Poder Ejecutivo nacional, provincias, municipios o personas de derecho privado al INAI, así como los instrumentos de transferencias del dominio realizados.

3. Gestiones realizadas ante las autoridades competentes sobre la transferencia, de la titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que fuesen de la administración nacional, provincial o municipal y pudieren corresponder a las comunidades indígenas.

4. Gestiones realizadas ante autoridades competentes para la declaración de utilidad pública para su posterior expropiación, de tierras que podrían ser cedidas a comunidades indígenas.

5. Estudios realizados o en desarrollo, sobre situación de comunidades indígenas que los afectan con relación a sus tierras, indicando sus prioridades en la solución de los mismos.

6. Estudios realizados o en desarrollo sobre planes de adjudicación y, cuando corresponda, sobre expropiación de tierras.

*Zulema B. Daher.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Población y Recursos Humanos al considerar el proyecto de resolución de la señora diputada Daher por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre la situación respecto de la adjudicación, uso y explotación de tierras. Ley de políticas indígenas –23.302–, cree innecesario abun-

dar en más detalles que los expuestos por la autora en los fundamentos de la iniciativa, por lo que aconseja su aprobación.

*María E. Barbagelata.*

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El decreto 155/89 reglamentario de la ley 23.302 - Protección de comunidades aborígenes, en su artículo 2º determina que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) será la autoridad de aplicación; y en su artículo 3º lo señala como coordinador, planificador, impulsor y ejecutor de la adjudicación, uso y explotación de tierras que podrían corresponderles a las comunidades aborígenes.

Le incumbe al presidente del INAI, según lo establece el artículo 5º del decreto reglamentario, hacer conocer anualmente el análisis realizado sobre la situación de las comunidades indígenas y un informe sobre las actividades llevadas a cabo por el Instituto.

Además le corresponde decidir mediante resolución fundada, sobre la adjudicación de tierras cuya propiedad hubiese sido transferida por el Poder Ejecutivo nacional, provincias, municipios o personas de derecho privado al INAI, la suscripción de los instrumentos de transferencias del dominio; así como la gestión ante las autoridades competentes de la transferencia a quienes proponga, de la titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que fuesen de la administración nacional, provincial o municipal y la declaración de utilidad pública, para su posterior explotación, de tierras que van a ser cedidas a comunidades indígenas.

Asimismo es responsabilidad, según lo establece el artículo 7º, del Consejo Coordinador del INAI, realizar los estudios sobre situación de comunidades indígenas e individualizar los problemas que los afectan, proponiendo prioridades de la solución de los mismos, así como el estudio de planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación de tierras.

También le corresponde al INAI mantener actualizado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, como lo indica el artículo 16 del mencionado decreto, con la nómina de las comunidades aborígenes inscritas y no inscritas.

Con esta breve descripción de la legislación y responsabilidades vigentes, nos indica que se encuentra contemplado quiénes deben encarar desde la detección del problema hasta la solución final del mismo por medio del análisis, estudio, propuestas, etcétera, de los problemas que nuestros hermanos aborígenes pudieron tener.

Es el momento de contar con la información requerida y necesaria, para que en este ámbito legislativo se pueda, si fuere necesario, perfeccionar la legislación vigente para que las peticiones que hoy se presentan sean debidamente contempladas y

evitar eventuales generaciones de fenómenos psicosociales que día a día se suman en el ámbito político y social del país.

Múltiples voces de todos los estamentos se ocupan del problema aborigen y en particular de sus tierras, como la del intelectual Marcos Aguinis, quien expresó en el diario "La Nación" del día 4 de julio de 2004: "La reivindicación indigenista se basa en mitos, confunde, distorsiona y contiene la trampa de conmover nuestros sentimientos de solidaridad. Así como el marxismo conmovía con su promesa de poner fin a la explotación del hombre, y sólo llevó a nuevas formas de explotación y tragedia, el indigenismo promete acabar con las injusticias padecidas desde los tiempos de la colonia y sólo conseguirá profundizar su marginación". Este concepto nos obliga a una urgente participación en la búsqueda y complemento de las soluciones, en caso de que no sean contemplados por las autoridades responsables.

Como, hoy por hoy, es casi imposible asignar un número exacto de descendientes directos de pueblos originarios aunque se reconoce que en nuestro país existen actualmente 17 etnias representantes de nuestros pueblos originales, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra realizando la encuesta complementaria sobre comunidades indígenas contemplada en el censo nacional de 2001, que incluyó por primera vez este tema.

A fines del mes de noviembre terminará el relevamiento sobre 60.000 hogares en los que se identificó al menos una persona como integrante de una etnia originaria. Se aprecia en algo menos de un millón de personas las pertenecientes a esos pueblos que habitaron el territorio antes de la constitución del Estado argentino, a las que se les debe dar solución e integrarlas al resto de la sociedad.

Se realizó hace poco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un congreso indigenista sobre uso y tenencia de la tierra en el que participaron unos dos mil descendientes de pueblos originarios donde se exteriorizó: que el indigenismo tiene su raíz más profunda en su relación con la tierra; que en la mayoría de los casos las comunidades se autosostienen con el trabajo agrario de nivel de supervivencia, produciéndose el conflicto cuando se enfrentan los intereses de quienes están en un lugar y dicen que les pertenece por herencia de sangre y aquellos que exhiben títulos de propiedad legítimos aceptados por las leyes civiles vigentes.

Es por todo ello que se solicitan los informes señalados en el proyecto, a efectos de que se cuente con la información básica necesaria para –reiteramos– poder subsanar las deficiencias que pudieren existir y proporcionar a quienes tienen la responsabilidad de su ejecución de los instrumentos legislativos necesarios para llevar a cabo las acciones correspondientes, por lo que solicito al señor presidente se apruebe el presente proyecto.

*Zulema B. Daher.*